

AGENDA GLOBAL

Montevideo Uruguay - Jueves 9 de julio de 2009 - N° 109 - Distribuido con *la diaria*



TWN

Third World Network

- La crisis según el Banco de Pagos Internacionales
- América Latina: boom económico y desigualdad
- Cambio climático y aranceles



Mientras en Estados Unidos continúan los debates sobre si existen o no "brotes verdes" en la economía que marcarían el fin de la crisis, en muchos países, y especialmente en el mundo en desarrollo, los asuntos se están agravando. La recesión en Estados Unidos se inició con una falla en el sistema financiero que rápidamente se tradujo en una desaceleración de la economía real.

Pero en el mundo en desarrollo es justamente lo contrario: una disminución de las exportaciones, la reducción de las remesas de los emigrantes, la disminución de la inversión extranjera directa y una caída drástica en los flujos de capital han llevado al debilitamiento económico. Como resultado de ello, incluso países con buenos sistemas regulatorios enfrentan ahora problemas en sus sectores financieros.

El 23 de junio, una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis económica mundial y su impacto en los países en desarrollo llegó a un consenso sobre las causas de la recesión y por qué ésta afecta tanto a los países en desarrollo. Se esbozaron algunas de las medidas que deben ser consideradas y se estableció un grupo de trabajo para explorar el camino a seguir, orientado por un grupo de expertos.

El acuerdo fue notable. Al ofrecer una explicación más clara de la crisis y lo que hay que hacer que la ofrecida por el G-20, la ONU mostró que la toma de decisiones no tiene por qué limitarse a un club de pocos países que carece de legitimidad política y en gran parte está dominado por los que tienen la mayor responsabilidad de que la crisis estallara. De hecho, el acuerdo demostró el valor de un enfoque más inclusivo, por ejemplo, formulando preguntas clave, aunque hirieran la sensibilidad de algunos de los países más grandes, o deteniéndose en los temas que resuelven entre los más pobres, aun cuando no son las prioridades para los más ricos.

Uno podría pensar que Estados

Manejar la globalización, no empujarla

Joseph Stiglitz

Unidos debería haber jugado un papel de liderazgo, ya que la crisis nació allí. En efecto, el Departamento del Tesoro -incluyendo algunos funcionarios que son actualmente miembros del equipo económico del presidente Barack Obama- impulsó la liberalización de los mercados financieros y del movimiento de capitales, lo que se tradujo en el rápido contagio de los problemas de Estados Unidos a todo el mundo.

Si bien hubo menos liderazgo de Estados Unidos de lo que cabría esperar, muchos de los participantes se mostraron simplemente aliviados de que Washington no pusiera obstáculos al consenso mundial, tal como hubiera sido el caso si George W. Bush siguiera siendo presidente.

Uno podría esperar que Estados Unidos sería el primero en ofrecer grandes cantidades de dinero para ayudar a las muchas víctimas inocentes de las políticas que promovieron. Pero no. Obama tuvo que luchar duro para extraer de un reacio Congreso modestas contribuciones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero muchos países en desarrollo acaban de salir de mucho tiempo de sobrecargas por deudas. No quieren pasar por lo mismo otra vez. Lo que necesitan son donaciones o subvenciones, no préstamos. El G-20, que recurrió al FMI para proporcionar la mayor parte del dinero que los países en desarrollo necesitan para hacer frente a la crisis, no tuvo esto en cuenta. La Conferencia de la ONU sí.

La cuestión más delicada de las abordadas por la conferencia de la ONU -demasiado sensible como

para que se debatiera en el G-20- fue la reforma del sistema mundial de reservas. La acumulación de reservas contribuye a los desequilibrios mundiales y la insuficiencia de la demanda agregada global, ya que los países ponen de lado a cientos de miles de millones de dólares como medida de precaución contra la volatilidad mundial. Estados Unidos no estaba entusiasmado por llevar a cabo esta discusión. Y eso no es de extrañar, ya que al ser el dólar la moneda preferida de reserva, se beneficia con billones (millones de millones) de dólares de préstamos provenientes de los países en desarrollo que compran bonos del Tesoro por los que en la actualidad casi no pagan ningún interés.

Pero le guste a Estados Unidos o no, el sistema de reservas en dólares se deshilacha. La cuestión es sólo si nos movemos desde el sistema actual a otro en una forma caótica, o de manera cuidadosa y estructurada. Los países que tienen grandes reservas saben que guardar dólares es un mal negocio. El rendimiento es poco o nulo, y hay un alto riesgo de inflación o de devaluación de la moneda, todo lo cual conspira contra el valor real de sus activos.

En el último día de la conferencia, mientras que Estados Unidos expresaba sus reservas a discutir siquiera en la ONU esta cuestión que afecta a todos los países, China reiteró una vez más que ha llegado el momento de empezar a trabajar hacia una moneda de reserva mundial. Como la moneda de un país sólo puede ser una moneda de reserva si

los demás están dispuestos a aceptarla como tal, parece que los tiempos del dólar se están acabando.

Emblemática de la diferencia entre la ONU y las conferencias del G-20 fue el debate sobre el secreto bancario: mientras que el G-20 se centró en la evasión de impuestos, la conferencia de la ONU abordó también la corrupción. Algunos expertos sostienen que ésta da lugar a la salida de más dinero de algunos de los países más pobres que toda la ayuda extranjera que éstos reciben.

Estados Unidos y otros países industrializados han empujado la globalización. Pero esta crisis ha demostrado que no han logrado manejar la globalización. Si la globalización debe trabajar para todos, las decisiones acerca de cómo administrarla deben tomarse en un marco democrático e incluyente, con la participación tanto de los perpetradores de los errores como de sus víctimas.

La ONU, a pesar de todos sus defectos, es la institución internacional incluyente. Esta conferencia, al igual que una anterior sobre la financiación para el desarrollo, ha demostrado el papel fundamental que debe desempeñar la ONU en cualquier debate mundial sobre la reforma del sistema financiero y económico mundial. ■

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, preside una Comisión de Expertos, designada por el presidente de la Asamblea General de la ONU. Artículo distribuido por Project Syndicate.

En su informe anual publicado el 29 de junio último, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) advierte que el camino de salida de la crisis financiera es estrecho y subrayó la necesidad de concentrarse claramente en el mediano plazo y en la sostenibilidad al elaborar respuestas macroeconómicas y de política financiera.

La crisis, observa el BIS, tiene causas tanto macroeconómicas como microeconómicas: grandes desequilibrios globales, un período prolongado de bajos tipos de interés reales, incentivos distorsionados y una depreciación de riesgo.

Hubo fallas en el mercado y en la regulación que permitieron un excesivo apalancamiento financiero.

La crisis, que comenzó en agosto de 2007, se intensificó en setiembre y octubre de 2008, lo que obligó a autoridades monetarias, fiscales y reglamentarias a ampliar su lucha para restablecer la salud del sistema financiero y contrarrestar las amenazas a la economía real. La escala y el alcance de las medidas monetarias y fiscales adoptadas no tienen precedentes.

El resultado ha sido “una mezcla inevitablemente confusa” de tratamientos de urgencia para detener la caída y de un nuevo programa de reforma integral que siente las bases de un crecimiento sostenible.

Sin embargo, advierte el BIS, dos enormes riesgos para la recuperación a largo plazo están al acecho entre los numerosos esfuerzos de corto plazo.

En primer lugar, las medidas políticas tomadas hasta ahora pueden ser insuficientes para restaurar la salud del sistema bancario. En segundo lugar, la falta de estrategias de salida claramente expresadas para los programas de restauración monetaria, fiscal y financiera amenaza con obstaculizar, en lugar de apoyar, los necesarios ajustes macroeconómicos.

Los balances de muchas instituciones financieras aún no han sido arreglados, y se necesitan nuevas medidas para solucionar este problema. Un sistema financiero sano es una precondición para la eficacia de las políticas expansionistas y del crecimiento real estable a largo plazo.

Es “esencial que las autoridades [...] restaren el sistema financiero”, dice el informe anual del BIS, y “que perseveren hasta terminar el trabajo”. Además, advierte, las autoridades deben resistir el proteccionismo financiero –que a veces es una consecuencia involuntaria de apoyo nacional para el sector financiero–, puesto que limitaría el crecimiento y el desarrollo.

CRISIS FINANCIERA

Estabilización, fragilidad e incertidumbre

Chakravarthi Raghavan

La crisis financiera sistémica que comenzó hace dos años muestra algunas señales de estabilización, desde marzo de 2009, como resultado de sucesivas intervenciones de gobiernos y bancos centrales en una escala sin precedentes, pero la situación sigue siendo frágil y el proceso de normalización será largo e incierto, pronosticó el Banco de Pagos Internacionales.

El informe señala que algunas de las medidas de rescate de corto plazo para resolver problemas actuales pueden agregarse a problemas futuros. Gobiernos y bancos centrales han intervenido –pese a los cuestionamientos de índole moral– para rescatar instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para fracasar” debido a sus intensos efectos sobre el sistema en general.

Sin embargo, los paquetes de rescate estimulan la concentración del sector financiero –mediante fusiones y adquisiciones alentadas por las autoridades– mientras por otro lado las reformas de las políticas regulatorias procuran hacer más manejables los riesgos y reducir o eliminar las instituciones “demasiado grandes para fracasar”.

“En el futuro, una firma financiera que sea demasiado grande o demasiado interconectada para fracasar será demasiado grande para existir”, sostiene el informe del BIS.

Los bancos mundiales tienen operaciones en decenas de países, añade, y se ha considerado que esa intermediación mundial aumentaba la eficiencia del sistema financiero. No obstante, al ver que los bancos extranjeros reducen su actividad durante la crisis, los gobiernos anfitriones pueden volverse menos propensos a permitir que instituciones extranjeras operen en su territorio. Esto podría fortalecer el papel de las autoridades supervisoras del país anfitrión en la protección de sus sistemas financieros frente a salidas apresuradas de bancos extranjeros.

Pero al reducirse la facilidad con que el capital se mueve a través de las fronteras, puede disminuir el comercio mundial de bienes y servicios, dice el BIS, en lo que es más una visión teológica que basada en pruebas empíricas sobre los beneficios de la globalización, y más específicamente, del libre movimiento del capital a través de las fronteras.

La ejecución del rescate es una tarea compleja que conlleva muchos riesgos, advierte el BIS.

Las políticas deberían colaborar con un ajuste ordenado, y no obstaculizarlo. Deben lograr un equilibrio entre los estímulos de corto plazo y estrategias de salida claramente articuladas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Deben permitir que el sector financiero se contraiga mientras los prestatarios reducen su apalancamiento. Y deben promover un cambio en los modelos de producción, sustituyendo los modelos de crecimiento basados en las exportaciones y el apalancamiento financiero por otros más equilibrados.

Los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para construir un sistema financiero más resistente. Corregir las enormes fallas reveladas por la crisis implica que se debe reconocer y mitigar el riesgo sistémico en todas sus formas, adoptando una perspectiva “macroprudencial”, como exhorta el BIS desde hace muchos años.

El presidente de la Junta Directiva del BIS, Guillermo Ortiz, señaló que “el trabajo tendrá que ser coordinado internacionalmente entre una gran variedad de países” y agregó que “en particular, las instituciones con

experiencia sobre el terreno (incluida la Junta de Estabilidad Financiera y los comités reguladores) deberán tener un papel preponderante”.

El informe anual del BIS sostiene que se debe reformar tanto a los instrumentos financieros como a los mercados y a las instituciones para que surja un sistema sólido. En cuanto a los instrumentos, la reforma implica un mecanismo que evalúe su seguridad, limite su disponibilidad y realice advertencias sobre su conveniencia y sus riesgos.

En cuanto a los mercados, implica alentar el comercio y la compensación mediante contrapartes e intercambios centrales. Y en cuanto a las instituciones, implica la aplicación cabal de normas prudentes mejoradas, que integren una perspectiva sistémica.

Pero sobre todo, los reguladores y supervisores deben adoptar una orientación “macroprudencial”. La concentración en la estabilidad del sistema en su conjunto tanto como en la viabilidad de instituciones individuales reduciría la probabilidad de fracasos conjuntos que surjan de exposiciones comunes y al mismo tiempo moderen el carácter procíclico inherente al sistema financiero.

En la Asamblea General Anual del BIS, el gerente general de la institución, Jaime Caruana, dijo que están en curso varios proyectos para poner en práctica el enfoque macroprudencial, sobre la base de un nuevo consenso internacional, y que el BIS participa activamente en todos ellos.

Sin embargo, mejorar la regulación no es suficiente. Las políticas macroeconómicas pueden y deben tener un papel en la promoción de la estabilidad financiera. Para las políticas monetarias, esto implica tomar más en cuenta los precios de los activos y las explosiones de créditos; para la política fiscal, implica dar más importancia a la disciplina fiscal a mediano plazo y a la sostenibilidad a largo plazo.

El informe subraya que, para lograr una recuperación estable y evitar futuros riesgos sistémicos, es necesario apartarse del crecimiento dirigido por el apalancamiento en las economías industriales y del crecimiento orientado por las exportaciones en las economías de mercados emergentes.

El sistema financiero debe repararse rápidamente, y se debe perseverar en la tarea hasta que la reestructuración esté completa. Esto implica encauzar las políticas en una vía sostenible mediante la reducción del gasto y el aumento de los impuestos, en cuanto se recupere un crecimiento estable.

También implica la salida de los bancos centrales del negocio de la intermediación en cuanto las instituciones financieras se pongan de acuerdo sobre sus nuevos modelos de negocios y los mercados financieros reanuden las operaciones normales. ■



Este artículo se publicó en South-North Development Monitor (SUNS), el 30 de junio de 2009.



Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en ocasión de la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago del pasado mes de abril, nos dice que la desigualdad en América Latina no ha disminuido en los últimos años. El informe mide el coeficiente de Gini en 1995 y, también, en el 2007, es decir, incluye los años del *boom* del crecimiento económico que comenzó en el 2001.

La desigualdad se mide con el llamado coeficiente de Gini, que es un índice que va de 0 a 1 (mientras el índice es más alto, mayor es la desigualdad). En Canadá y Estados Unidos el coeficiente de Gini en 1995 era de 0,28 y 0,36, lo que determina una desigualdad baja.

Pero en el 2007, el coeficiente de Gini de Canadá y Estados Unidos aumenta a 0,32 y 0,39. Lo que quiere decir que la desigualdad ha aumentado. Pero, ojo, véase que el nivel de desigualdad está en los niveles de 0,8, lo que los sitúa en el ranking mundial como países con menor desigualdad relativa.

América Latina es el continente con la más alta desigualdad en la distribución de ingresos de todo el mundo. Dice la CEPAL que “en el 2007 el coeficiente de Gini para las Américas llegó a 0,51, por sobre los valores de África subsahariana, Asia oriental y el Pacífico, África septentrional y Medio Oriente, Asia meridional, Europa oriental/Asia central y los países de la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica)”.

En 1995, el coeficiente de Gini de Brasil fue 0,64. Después vienen Colombia, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Chile, todos ellos con coeficientes de Gini entre 0,55 y 0,6. Más atrás están Perú y México, con 0,53 y 0,54. Finalmente tenemos a Uruguay, Costa Rica y

AMÉRICA LATINA

Hubo boom económico y la desigualdad casi ni se movió

Humberto Campodónico

Venezuela, con mejores coeficientes de Gini que los anteriores.

Vamos ahora al coeficiente de Gini de los países de América Latina en el 2007. Aquí encontramos que algunos países han logrado “mejorar” la desigualdad, como dice el Informe de la CEPAL. Es clave, sin embargo, mirar más de cerca esa “mejora” para determinar su verdadera magnitud.

SI ESTO SUCEDIÓ DURANTE LOS AÑOS DE BOOM ECONÓMICO, AHORA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD AUMENTARÁN DEBIDO A LA RECESIÓN.

En Brasil, el coeficiente de Gini se reduce de 0,64 a 0,59, con lo que sigue siendo el campeón de la desigualdad. Colombia baja de 0,6 a 0,58, Bolivia de 0,59 a 0,56, Chile de 0,55 a 0,52 y Perú de 0,53 a 0,51. En Venezuela se produce una de las mayores bajas del coeficiente de Gini, pues pasa de 0,48 a 0,43. En los países donde la desigualdad aumenta tenemos a Uruguay (de 0,43 a 0,46) y Costa Rica (de 0,47 a 0,49).

En general, lo que se aprecia en América Latina es que en los años de gran crecimiento económico, apenas si se redujo la desigualdad. Algo parecido sucede con la pobreza, según el mismo Informe. El número de pobres bajó de 211 millones a 184 millones del 2000 al 2007, cifra insuficiente. Dice la CEPAL: “Continúan siendo significativos los segmentos de la población que no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades básicas y que persiste el alto nivel de inequidad en la distribución del ingreso, que ubica a muchos países de las Américas entre las distribuciones más desiguales del mundo”.

Si esto sucedió durante los años de *boom* económico, ahora la pobreza y la desigualdad aumentarán debido a la recesión, lo que ya ha producido despidos masivos y, en todos los países, la caída de los ingresos fiscales.

Lo expuesto corrobora que el solo crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad, y que se debe crecer redistribuyendo. Pero la doctrina del perro del hortelano (formulada por el presidente peruano Alan García en una serie de artículos de prensa) sigue planteando, a sangre y fuego, que “salvo la inversión, todo es ilusión”. ■

Humberto Campodónico es ingeniero y economista peruano.

Este artículo se publicó en el diario *La República* de Lima, el 3 de julio de 2009.

● **El CIADI y los TLC.** Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial tuvo lugar el evento “Soberanía de los Pueblos antes que ganancias de las transnacionales: No al CIADI y a los TLC para construir un orden económico y social más justo”, organizado por OWINFS –Nuestro Mundo No Está en Venta, Alianza Social Continental, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra Internacional, Social Watch, Enlazando Alternativas y la Iniciativa 10 Días de Acción, con el apoyo de las Misiones de Bolivia y Ecuador ante las Naciones Unidas.

Unas semanas después de que el gobierno ecuatoriano anunciara su retiro del CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias en Inversiones), el tribunal secreto del Banco Mundial, el presidente Rafael Correa mostró su molestia con la supremacía de derechos

de las transnacionales frente a la dignidad de las personas y criticó la “ideología fundamentalista” del neoliberalismo porque ha llevado al mundo a la actual crisis.

Lori Wallach, directora de Global Trade Watch, un proyecto de la ONG estadounidense Public Citizen, añadió que esta crisis “es el resultado del Acuerdo de Servicios Financieros firmado en 1999 en el marco de la OMC que puso candados a la regulación financiera nacional, y exportó el modelo a todo el mundo” y “lo peor es que el G-20 ha exigido la conclusión de la Ronda de Doha de la OMC que profundizará mucho más la liberalización y desregulación de los servicios financieros y otros sectores”. ■

Monitor de Instituciones Financieras Internacionales en América Latina: <http://ifis.choike.org/esp>

SUNS

South-North Development Monitor

● **Crisis mundial amenaza a los avances en la erradicación del hambre y la pobreza.** De cincuenta y cinco a noventa millones de personas más de lo previsto viven en la extrema pobreza en 2009 como consecuencia de la actual crisis económica y financiera, estima un informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) divulgado el lunes 6 de julio.

A sólo seis años de que se cumpla el plazo para alcanzar los ODM, fijado en 2015, los principales avances en la lucha contra la pobreza y el hambre han comenzado a frenarse e incluso a revertirse como consecuencia de las crisis económicas y alimentarias mundiales, dice el informe.

El informe, que según el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Sha Zukang, es la evaluación más global de los ODM realizada hasta la fecha, también encuentra que los países donantes se están quedando cortos en el cumplimiento de los compromisos contraídos en la ayuda para alcanzar los ODM y es probable que la ayuda disminuya aún más como consecuencia del negativo clima económico. (7/7/2009) ■

● **OMC acoge segundo examen global de la ayuda al comercio.** El Segundo Examen Global de la Ayuda para el Comercio se llevó a cabo el lunes 6 y el martes 7 de julio en la sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, para evaluar los progresos realizados desde el primer examen celebrado en noviembre de 2007.

La iniciativa Ayuda para el Comercio fue lanzada en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong-China en 2005.

Según la OMC, el Segundo Examen Mundial ofrece una oportunidad para dar un nuevo impulso al ambicioso mandato sobre la Ayuda para el Comercio, que pretende ayudar a los países en desarrollo, y en particular a los menos adelantados, a construir la capacidad de oferta e infraestructura necesaria para aprovechar las ventajas de la apertura comercial y conectarse con la economía mundial.

Entre los altos funcionarios que asistieron a la reunión se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, así como los presidentes de los bancos regionales de desarrollo. (7/7/2009) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>

● Pueden y deben los países desarrollados imponer aranceles adicionales a las importaciones provenientes de países en desarrollo en función del nivel de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero vinculados a la producción de esas importaciones? Éste es un tema candente, en especial desde que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó a fines de junio una Ley de Energía referida principalmente al problema del cambio climático.

Parte de esa ley –conocida como Waxman-Markey– obliga al presidente de Estados Unidos a aplicar aranceles a las importaciones de ciertos productos provenientes de un gran número de países en desarrollo, a partir de 2020. Los importadores tendrán que comprar “permisos” para las emisiones de los productos que ingresen al país.

En los hechos, esto constituye un arancel o impuesto adicional a las importaciones provenientes de los países en desarrollo, y la tarifa depende de cuánto dióxido de carbono se emita durante la fabricación de esos productos.

Los defensores de la Ley argumentaron que las empresas estadounidenses, que también tendrán que pagar permisos de emisión, podrán mantener su competitividad.

La Ley limitará el nivel total de emisiones para Estados Unidos.

Como otros países desarrollados están obligados a limitar sus emisiones a un nivel que debe negociarse, la medida sobre las importaciones se aplicará sólo o principalmente a los países en desarrollo. Y como los países menos adelantados y los países en desarrollo responsables de una pequeña proporción del total de emisiones están eximidos, los afectados serán los países de medianos ingresos y los de grandes poblaciones.

Quienes importen productos de esos países que hayan requerido un uso intensivo de energía deberán comprar permisos de emisión, lo que aumentará los precios de las importaciones y podría afectar sus ventas.

Cambio climático y aranceles al Sur

Martin Khor

Productos químicos, hierro, acero, cemento, vidrio, cal, algunos productos de la celulosa y el papel, y metales no ferrosos como el aluminio y el cobre serían algunos de los productos que quedarían sujetos a este nuevo arancel.

Los dos países en desarrollo más grandes, China e India, ya criticaron este aspecto de la Ley Waxman-Markey. Se trata de un proteccionismo disfrazado que viola las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), arguyen.

SE TRATA DE UN PROTECCIONISMO DISFRAZADO QUE VIOLA LAS NORMAS DE LA OMC, ARGUYEN CHINA E INDIA.

Según la Ley, las medidas a las importaciones se aplicarán automáticamente a partir de 2020, a menos que el presidente de Estados Unidos declare que son contrarias a los intereses económicos nacionales y el Congreso lo apruebe.

El uso de medidas comerciales cuyo efecto implique el bloqueo de importaciones de los países en desarrollo en función de consideraciones sobre el clima generará una fuerte controversia y tal vez conlleve un duro golpe a la OMC y al sistema multilateral de comercio. También enrarecerá la atmósfera de las negociaciones de la

convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Para muchos países desarrollados la Ley de Estados Unidos será una forma de evadir su compromiso de ayudar a los países en desarrollo y, en cambio, poner la carga del ajuste en estos últimos.

En el marco de la convención sobre el clima, sólo los países desarrollados deben adoptar compromisos jurídicamente vinculantes de reducción de las emisiones, en reconocimiento de su responsabilidad por gran parte de las emisiones del pasado. También se comprometieron a pagar los costos en que incurran los países en desarrollo cuando adopten medidas vinculadas al cambio climático. La convención también dice que la acción de los países en desarrollo contra el cambio climático depende del grado en que los países desarrollados les provean de financiamiento y transferencia de tecnología.

Existen crecientes dudas acerca de si las medidas propuestas por Estados Unidos están permitidas por la OMC. Para que esto ocurra, hay dos requisitos: en primer lugar debe haber “trato nacional” (un producto importado debe estar sujeto a los mismos cargos que uno nacional) y, en segundo, los productos similares deben ser tratados de la misma forma (debe cobrarse lo mismo a uno importado que a uno nacional con las mismas características físicas).

Al considerar los impuestos o costos de importación, son las características físicas del producto importado lo que debe considerarse, y no el proceso y los métodos de

producción que se utilicen en su fabricación.

Muchos argumentan que como los aranceles vinculados al clima que se impondrán se basan en procesos y métodos de producción (es decir, en función de cuántas emisiones provocó producirlo), esto no es compatible con las normas o el espíritu de la OMC.

Sin embargo, otros señalan que hubo varios casos referidos a la cuestión de los procesos y métodos de producción dirimidos por los grupos especiales de la OMC, cuyas decisiones no fueron concluyentes en cuanto a si la OMC permite o no una medida de importación basada en los procesos y métodos de producción.

Si la medida no aclara esos dos requisitos, podría intentarse un tercer método, que es basarse en el Artículo XX del GATT, que autoriza una excepción (de cumplir las normas de dicho acuerdo) en función de motivaciones ambientales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Hacer uso de esta excepción ambiental para imponer un impuesto adicional a las importaciones provenientes de los países en desarrollo, en función de sus niveles de contaminación, es injusto para estos países, cuyo grado de desarrollo, acceso a los recursos financieros y tecnología son mucho menores que los de los países desarrollados.

En todo caso, se espera que este tema se plante tanto en la OMC como en la convención sobre el clima, porque los países en desarrollo sospechan que las medidas comerciales propuestas en el Congreso de Estados Unidos se utilizarán para bloquear injustamente sus exportaciones.

Éste es uno de los temas que se debatirán intensamente en los próximos años. ■

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Traducción: Raquel Núñez Mutter.

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez.

(c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

